

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos Rol N° 8738-18 de esta Corte Suprema, se han deducido recursos de casación en la forma y en el fondo por la parte condenada como tercero civilmente responsable, BBVA Corredoras de Bolsa Limitada -en adelante, BBVA-, en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de once de abril de dos mil dieciséis, escrita a fs. 368 y ss., que revocó la pronunciada por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, en cuanto ésta no accedió a considerar los intereses corrientes en la liquidación practicada y, en su lugar, declaró *“que se practique la liquidación del crédito en capital, reajustes e intereses corrientes, desde la constitución en mora respecto de estos últimos, conforme a lo resuelto en el presente fallo y proceder a la tasación de las costas personales.”*

Se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

1°) Que el recurso de casación en la forma deducido se sustenta en las causales de los N°s. N° 4, 6 y 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante la primera causal del N° 4, esto es, extrapetita, se arguye que la actora en su demanda pidió se condene al pago de intereses desde la *comisión del delito*, petición que modifica al evacuar su traslado en el incidente que origina la presente disputa, cuando solicita que los intereses se adeuden a contar del ejercicio de la acción civil, lo que fue acogido por la sentencia impugnada.

La causal del N° 6, cosa juzgada, se apoya en que la sentencia de 2 de diciembre de 2014 que condena al pago de la indemnización, ya había resuelto



que los intereses se deben desde una eventual mora, la que se encuentra firme y ejecutoriada, sin embargo, el fallo en examen se opone a lo anterior al sentenciar que se está en mora desde una época pasada, el 4 de septiembre de 2003 cuando se ejerce la acción civil.

Y la última causal del N° 7, fundada en los mismos supuestos fácticos recién relatados, acusa que los referidos fallos contienen decisiones contradictorias.

Al concluir pide que se anule la decisión recurrida y que en la de reemplazo se confirme la sentencia de primer grado.

2°) Que mediante el recurso de casación en el fondo interpuesto por la misma parte se denuncia la infracción de dos grupos de normas legales.

En primer término, acusa el recurso la infracción de los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República y 174, 175 y 182 del Código de Procedimiento Civil, por la vulneración de un debido proceso legal ya que, a su juicio, ha sido afectado el efecto de cosa juzgada con la resolución recurrida.

En un segundo orden, denuncia una aplicación impropia de los artículos 647, 1551 N° 3, 1557, 2314, 2320 y 2322 del Código Civil y 103 bis del Código de Procedimiento Penal, por cuanto los sentenciadores recurren al citado artículo 1551 N° 3 para determinar la época desde la que la demandada se encuentra en mora, en circunstancias que este punto ya fue zanjado en la sentencia ejecutoriada del año 2014. Agrega que a la época en que la actora ejerce la acción civil, su parte todavía no era deudora de ésta lo cual sólo se establece por dicho fallo del año 2014. Sobre lo mismo, estima quebrantado el mencionado artículo 103 bis pues la sentencia reputa el ejercicio de la acción civil como una forma de



interpelación judicial en los términos del artículo 1551, lo que no es efectivo ni aplicable, ya que se trata de fuente de obligaciones distintas. En ese sentido, continúa, existe un error de aplicación en las normas de la mora y de la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, como asimismo, lo que dice relación con los intereses o frutos civiles.

Al concluir solicita que se anule la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo que confirme la de primer grado.

3°) Que para la adecuada resolución de los recursos deducidos, conviene tener a la vista los siguientes antecedentes que sintetizan los hitos principales de este procedimiento:

1. El 34° Juzgado del Crimen de Santiago instruyó la causa Rol N° C-176.739-2003, sobre Malversación de Caudales Públicos,
2. El 4 de septiembre de 2003 CORFO ejerce acción civil de conformidad al artículo 103 bis del Código de Procedimiento Penal, entre otros, en contra de "BBVA Corredores de Bolsa BHIF S.A."
3. El 7 de octubre de 2013 se dicta sentencia absolutoria de primer grado, en la parte penal y civil.
4. El 2 de diciembre de 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago revoca dicho fallo y, en su parte penal, condena a ocho personas por diversas infracciones a la Ley del Mercado de Valores. En tanto, en la sección civil, acoge la acción de indemnización de perjuicios deducida por CORFO contra los condenados y contra "BBVA Corredores de Bolsa", como tercero civilmente responsable, imponiéndole *"pagar a Corfo la suma de \$ 26.462.295.646 por concepto de daño emergente, la que deberá*



reajustarse en la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, entre el mes de febrero de 2003 a la fecha de pago efectivo, con más los intereses corrientes, desde la mora, y costas de la causa".

5. El 10 de diciembre de 2014 CORFO pide el cumplimiento incidental del fallo, petición que no fue resuelta.
6. Deducidos sendos recursos de casación por los condenados, esta Corte Suprema, con fecha 11 de agosto de 2015, los rechazó.
7. El 20 de agosto de 2015 BBVA dio cuenta de pago, mediante consignación en la cuenta corriente del tribunal, por \$26.462.295.646 por concepto de capital adeudado y \$13.458.937.410 por concepto de reajuste aplicable al capital.
8. El 7 de septiembre de 2015 el tribunal de primera instancia resuelve *"practíquese liquidación del crédito y regulación de costas por el Tribunal de primera instancia"*.
9. El 10 de septiembre de 2015 BBVA pide precisar que la sentencia ordenó pagar intereses sólo desde la mora, lo que no ha ocurrido.
10. Al evacuar el traslado de dicha incidencia, CORFO se opone a esa solicitud, señala que BBVA está en mora desde septiembre de 2003, cuando se ejerció la acción civil.
11. El 28 de octubre de 2015 se dicta el cúmplase por el tribunal de primera instancia de conformidad al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
12. El 10 de noviembre de 2015, el tribunal de primera instancia, resuelve la incidencia originada por BBVA, declarando *"Que se rechaza la objeción planteada por la demandante civil en orden a contemplar en la liquidación*



del crédito ordenada practicar en estos autos, capital, reajustes e intereses corrientes, más costas procesales, debiendo ella contemplar únicamente el capital -daño emergente- reajustes por el período indicado en la sentencia definitiva que se encuentra firme y ejecutoriada y costas procesales.”

4º) Que la sentencia impugnada de 11 de abril de 2016, que revoca la extractada al final del considerando anterior, entrega los siguientes argumentos para dicha decisión:

“Sexto: Que, el quid del asunto, objeto de la presente apelación, es entonces desde cuándo se entiende que el deudor está constituido en mora. El recurrente atiende a lo que previene el artículo 1551 N° 3 del Código Civil, norma que establece que se constituye en mora el deudor por reconvención judicial; exige que se entable cualquier acción que cumpla con la función de intimidación al deudor, lo que habría ocurrido con la interposición de la acción indemnizatoria.

Séptimo: Que, a este respecto, como destacan Alessandri, Barros y Corral, en sus conocidos trabajos sobre la responsabilidad civil, la jurisprudencia se ha mostrado dubitativa en la determinación desde la fecha que se deben los intereses corrientes por daño patrimonial en la responsabilidad extracontractual (ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, De La Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Chileno, Tomo I, Segunda edición, Santiago de Chile, Ediar Editores, 1983, P. 559; BARROS BOURIE, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2006, N° 672, 889 y CORRAL TALCIANI, Hernán, Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2003, pp. 345-348). Así se ha resuelto que ellos proceden desde la comisión del ilícito, la



presentación o notificación de la demanda, la fecha de la sentencia de primera instancia o de segunda, la certificación de ejecutoria de la sentencia, desde que se esté en mora de cumplir la sentencia condenatoria o dependiendo de la naturaleza del daño indemnizable.

Octavo: Que en cuanto los intereses se ha estimado que equivalen al lucro cesante, y por ende para determinar desde cuándo se deben se debe atender a la función que cumplen. El principio general en Derecho de Daños es el del resarcimiento integral del daño. Independientemente del reproche penal, la víctima de un ilícito, que genere responsabilidad civil, debe quedar totalmente indemne del daño sufrido. Lo contrario supondría una alteración del incentivo deseado por parte del Derecho respecto del victimario. Lo que se busca por el Derecho civil por tanto es resarcir totalmente a la víctima, de modo que dicha indemnización también sea un aliciente ex –ante de una conducta adecuada por parte de los involucrados: víctima y victimario.

Noveno: Que la mora del deudor ‘mora solvendi o mora debitoris’ puede ser definida como ‘el retardo imputable en el cumplimiento de la obligación, y que persiste después de la interpelación o unido al requerimiento de parte del acreedor’.

Décimo: Que el pago del capital y reajuste no exime a BBVA del pago de los intereses, sino que más bien ocurre lo contrario los intereses se adeudan hasta dicho pago. Ello es de toda lógica por cuanto hasta ahí la falta de resarcimiento no genera perjuicios al acreedor, por cuanto hasta que CORFO recibió dicho pago no se le deben intereses, ni lucro cesante.



Undécimo: Que, sin embargo, efectivamente y a pesar que la mora es una figura ajena a la responsabilidad extracontractual, los intereses se deben desde el primer acto por el cual el acreedor interpela al deudor, que sería en la especie desde la notificación de la demanda. Ello sería de esta forma en un juicio civil, pero como en autos la acción civil se entabla dentro del antiguo procedimiento penal, a este respecto se discute si las gestiones cautelares previas a la demanda constituyen en mora al deudor. A su vez, se debe analizar si la interposición de la acción civil en el sumario, conforme a lo preceptuado por el artículo 103 bis del Código de Procedimiento Penal, genera el efecto de constituir en mora al deudor. A este respecto cabe recordar que dicha norma no se refiere a la mora, sino a la interrupción de prescripción extintiva, estableciendo que la interposición de la acción civil, en el sumario, interrumpe la prescripción extintiva de la acción civil.

Décimo Segundo: Que la acción civil, independientemente que se entable en el sumario se rige por la lógica del Derecho civil, y se ha entendido que cualquier gestión en el sumario, que reúna los requisitos de la interrupción civil, es decir, que termine con la inactividad del acreedor y se notifique al deudor, produce los efectos de dicha figura. Esta solución debe ser extrapolada a la mora, es decir, si se reúnen los requisitos de la mora, en los términos ya analizados, se debe entender que el deudor está constituido en mora. De este modo, el deudor está constituido en mora desde que se entabló la acción de indemnización de perjuicios en el sumario, esto es desde el 4 de septiembre del 2003. Así, el deudor no puede ignorar que desde dicho momento su retardo le ocasiona perjuicios al acreedor, y no cabe duda que mediante los referidos recursos se le ha interpelado para efectuar el pago.”



En cuanto al Recurso de casación en la forma:

5º) Que en lo atinente a la causal del arbitrio de casación formal del N° 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, extrapetita, ésta no podrá prosperar desde que en la demanda, en subsidio de las peticiones principales, la actora solicita se condene a la aquí recurrente, al pago de la suma que el tribunal determine, lo que conlleva incorporar a los temas discutidos la posibilidad de fijar los intereses en un monto menor al pretendido, según las defensas que la demandada proponga y el sentenciador acepte, lo que precisamente puede obedecer a que no se dé lugar al planteamiento principal de la actora para que los intereses se devenguen desde la comisión del delito sino a un momento posterior, como ocurrió en este caso. Por tanto, al ordenar el fallo en estudio el pago de intereses desde una época ulterior a la de la comisión del delito, no se ha apartado del objeto de la controversia sometida a su conocimiento por los litigantes de autos.

6º) Que la causal del N° 6 del citado artículo 768, esto es, cosa juzgada, igualmente deberá ser desestimada, pues aun cuando la sentencia de 2 de diciembre de 2014 condena al pago de intereses “*desde la mora*”, hay opiniones disímiles sobre si la institución de la mora y la reconvención mediante la que se constituye, es atinente en el marco de la responsabilidad extracontractual y, dado que ese fallo no abraza explícitamente ninguna posición al respecto, acabó como un punto ambiguo que intentó disipar la sentencia impugnada, sin que, por tanto, pueda aseverarse que se trate de una controversia ya resuelta.

7º) Que sobre la tercera causal del N° 7 del artículo 768, por la cual se reprocha al fallo en examen el contener decisiones contradictorias, amén de lo



discurrido en el basamento precedente, cabe consignar que esta causal se configura ante determinaciones opuestas en un mismo pronunciamiento, defecto inviable en el caso *sub lite* si se arguyen decisiones supuestamente discordantes alojadas en distintas sentencias dictadas por las Corte de Apelaciones de Santiago, una de 2 de diciembre de 2014 y otra de 11 de abril de 2016.

8º) Que al no demostrarse ninguno de los vicios esgrimidos, el recurso de casación en la forma no será acogido.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

9º) Que la decisión de lo planteado en el arbitrio de casación sustantiva pasa por dilucidar si la correcta aplicación del derecho importa interpretar la expresión “*desde la mora*” que utiliza la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de 2 de diciembre de 2014 para definir la oportunidad desde la que se deben los intereses, como equivalente al ejercicio de la acción civil en el sumario, de conformidad al artículo 103 bis del Código de Procedimiento Penal, tal como postula la recurrida y acepta el fallo impugnado, o más bien asimilable a la ejecutoriedad de la sentencia, como defiende el recurrente y lo declara la sentencia del *a quo*.

10º) Que, como primera aproximación con ese norte, no habiendo disposiciones particulares en materia de responsabilidad extracontractual sobre el tema aquí debatido, se hace menester acudir a la normativa general, entre ésta, la que regula los efectos de las obligaciones, pero únicamente en cuanto sea compatible con la especial naturaleza de la responsabilidad que se ha perseguido en estos autos.



11º) Que en nuestro ordenamiento jurídico los intereses son considerados frutos civiles, constituidos por los rendimientos o utilidades que el dueño de una cosa obtiene del goce de la misma, como una facultad inherente del derecho de dominio, y de los cuales se le priva total o parcialmente, cuando se daña, inutiliza o despoja de esa cosa, causándole un menoscabo económico que sólo se compensa íntegramente cuando, junto con restituir al perjudicado el valor de la cosa arrebatada o de lo invertido por éste en subsanar su deterioro, se le indemniza la pérdida derivada del retardo en el pago de ese valor, esto es, el lucro cesante implícito en ese atraso, el que tratándose de una suma de dinero o instrumentos financieros como los que fueron objeto del delito de estos antecedentes, corresponde al menos a los intereses corrientes que el dueño habría obtenido en el intertanto.

12º) Que los intereses tienen naturaleza o función resarcitoria o moratoria.¹

13º) Que en materia civil extracontractual que aquí interesa, si la sentencia ordena el pago de intereses desde la época del ilícito, dichos intereses tienen un carácter resarcitorio, pues con ellos se busca compensar el tiempo que la víctima estuvo impedida de hacer producir su propiedad y obtener una ganancia esperada que no se logra debido al hecho dañino. En este escenario la condena al pago de intereses desde el momento referido, procura situar a la víctima en la época de la dictación de la sentencia, en el mismo estado o en uno próximo al que se hallaría de no haber sufrido la privación de parte de su patrimonio.

1 Distingue la naturaleza resarcitoria-compensatoria y moratoria, de los intereses en materia extracontractual, Pinochet, R. y Concha F. "Criterios para el cálculo de intereses y reajustes en casos de condenas judiciales en juicios de indemnizaciones civiles por responsabilidad civil extracontractual", *Revista de Derecho Universidad de Concepción*, 2015, N° 237, LXXXIII, p. 129, y Díez, J. L., *El Daño Extracontractual*, Ed. Jurídica de Chile, 1997, p. 219.



En este caso, claramente la fuente de esa obligación de pagar intereses no es la sentencia judicial que condena a la indemnización, sino el mismo hecho ilícito y, desde esa perspectiva, el fallo ostenta un carácter meramente declarativo de esa obligación y no constitutivo.

14°) Que, en cambio, siempre en el ámbito extracontractual, si la sentencia impone el pago de intereses desde que se certifique la ejecutoriedad del fallo que ordena la indemnización hasta su pago efectivo, esos intereses revisten una función moratoria, ya que representan la reparación pecuniaria que debe hacer el condenado por sentencia firme por el retardo en el pago de la suma fijada como indemnización en el mismo fallo, al privarle con ello al actor, ilegítimamente, de la posibilidad de hacer producir en el ínterin ese capital una determinada rentabilidad.

En este caso, sea que se considere como fuente de la obligación del pago de estos intereses moratorios el mismo ilícito declarado en la sentencia judicial, o a esta última, lo que importa destacar ahora es que el fallo pasa a constituir el título del crédito para el perjudicado con el ilícito y la acreencia de que da cuenta devengará ese tipo de intereses desde que se halle firme.

15°) Que, conviene apurar en despejar que, por cierto, una sentencia puede otorgar ambos tipos de intereses al actor, resarcitorios y moratorios, como forma de propender a su reparación íntegra. Asimismo, podrían los sentenciadores conceder exclusivamente interés moratorio por apreciar la suma global fijada para satisfacer el daño extracontractual como suficiente y ya comprensiva de los perjuicios que buscan subsanar los intereses resarcitorios, o por otro motivo fundado, por ejemplo, tratarse de responsabilidad por daño moral -como es la



usanza en la jurisprudencia nacional-, cuestión que, en todo caso, será discutida por las partes y resuelta por cada tribunal, a la luz de las particularidades de cada caso juzgado.

16°) Que, por otra parte, la mora, como se regula en el artículo 1551 del Código Civil no tiene cabida en materia extracontractual, ni para el devengo de intereses resarcitorios ni moratorios. Huelga explicar que sus numerales 1° y 2° tratan supuestos evidentemente disonantes con la naturaleza de esta responsabilidad.

17°) Que en cuanto al numeral 3° del mencionado artículo 1551, en lo que se refiere a intereses resarcitorios, subordinar su procedencia a una reconvención judicial, o a cualquier otra interpelación asimilable, implica restringir de manera general el derecho del perjudicado a una cabal reparación. En efecto, el supeditarlos al ejercicio de la acción civil en el sumario o la interposición de la demanda en el plenario, echando mano, por vía de la analogía, a una institución prevista en la ley para el ámbito contractual, siempre imposibilitará ordenar el pago de intereses desde la misma época de comisión del ilícito o causación del daño, privando entonces al agraviado de un completo resarcimiento.

Y en lo concerniente a los intereses moratorios, procedentes una vez firme y ejecutoriado el fallo, la reconvención resulta redundante e insustancial, pues de lo pretendido por el perjudicado y a lo que ha accedido el fallo, ya se ha dado suficiente noticia al demandado a lo largo del proceso en sus distintas etapas e instancias.

18°) Que, nada más resta prevenir que no compete a esta Corte conociendo del arbitrio en examen, enjuiciar y, en su caso, enmendar lo decidido



por el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 2 de diciembre de 2014, el cual ya fue revisado en su oportunidad conforme a los reclamos contenidos en los recursos de casación entonces interpuestos, dentro de los que no se incluyó el aspecto ahora analizado.

De ese modo, esta Corte, sin que implique compartir o disentir de la forma en que fueron fijados los intereses en la sentencia de 2 de diciembre de 2014, nada más determinará el contenido que debe darse a lo resuelto sobre intereses, conforme a la correcta aplicación del derecho antes explicada.

19°) Que, sentadas ya todas las premisas jurídicas necesarias para arribar a una conclusión definitiva en la presente contienda, únicamente pende zanjarla sin más preámbulos.

Toda vez que la sentencia de 2 de diciembre de 2014, en su considerando 54° no da lugar a lo pedido por CORFO, esto es, que se disponga el pago de intereses desde la comisión del ilícito en febrero de 2003 y, por el contrario, accede a lo solicitado por BBVA para el evento de su condena, a saber, la imposición de ese pago desde la mora, sin tampoco declarar que se deben desde algún otro momento anterior a la ejecutoriedad del fallo, no puede sino concluirse que la sentencia rechaza otorgar intereses de naturaleza resarcitoria -de no ser así, necesariamente se habrían aceptado los intereses en la forma propuesta por CORFO en su demanda- e, ineludible corolario final, es que al resolver el pago de intereses “*desde la mora*”, pese al impreciso uso de esta frase, el referido fallo se refiere a los intereses moratorios, los que se devengan, como fue señalado *at supra*, desde que se halle firme la sentencia y hasta su efectivo pago.



20°) Que, así las cosas, yerra la sentencia recurrida por confundir la naturaleza y fundamento de los intereses resarcitorios y moratorios y también por aplicar por analogía instituciones propias de la responsabilidad contractual a la extracontractual, no obstante la incompatibilidad de aquéllas con ésta. Consecuencia de todo lo reseñado, el fallo en estudio atribuye equivocadamente al dictado el 2 de diciembre de 2014 el haber fijado como fecha desde la que se encuentra en mora la recurrente de estos autos, la del ejercicio de la acción civil durante el sumario, en circunstancias que la correcta aplicación del derecho y el respeto estricto a lo declarado en la mencionada sentencia de 2014, debió llevar a concluir que, *en el caso de marras*, los intereses se adeudarían desde el 28 de octubre de 2015 con la dictación del respectivo cúmplase, de conformidad al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, yerro que ha tenido indudable influencia sustancial en lo dispositivo del fallo y que será enmendado, acogiendo el presente recurso y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 767, 768, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 535, 541 y 546 del Código de Procedimiento Penal, se declara:

I. Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de fs. 382, en representación de BBVA Corredores de Bolsa Limitada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha once de abril de dos mil dieciséis, rolante a fs. 368 y siguientes.

II. Que **se acoge** el recurso de casación en el fondo interpuesto en el primer otrosí de fs. 382, en representación de BBVA Corredores de Bolsa Limitada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con



fecha once de abril de dos mil dieciséis, rolante a fs. 368 y siguientes, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.

Acordada la resolución que acoge el recurso de casación en el fondo, con el voto en contra del Ministro Sr. Llanos, quien estuvo por rechazar dicho arbitrio, por las siguientes consideraciones:

1º) Que no se comparte lo razonado en los motivos 16º en adelante de la sentencia de mayoría, así como las conclusiones derivadas de esas reflexiones, porque a juicio de este disidente, no obstante compartir la relevancia del principio de reparación integral, la constitución en mora, desde la que se debe la indemnización de perjuicios según el artículo 1557 del Código Civil, y la reconvención que trata el N° 3 del artículo 1551 del mismo código, no pierden autoridad en materia extracontractual, siendo una interpelación análoga a la mencionada reconvención indispensable también tratándose de intereses de carácter resarcitorio.

2º) Que, dado que los intereses con función resarcitoria constituyen parte de la reparación por los daños -lucro cesante- ocasionados con un delito o cuasidelito, la responsabilidad del autor está condicionada a que éste actúe con dolo o culpa aún respecto del atraso en su pago, es decir, sabiendo positivamente, o no pudiendo desconocer sin negligencia de su parte, que ha causado un perjuicio al ofendido y que éste requiere su compensación y, no obstante ese saber o deber saber, retarda su satisfacción, conclusión que deviene todavía más oportuna y forzosa si se habla de un tercero civilmente responsable como BBVA, es decir, quien no interviene en la conducta punible que perjudicó al actor



agraviado, sino que se le hace responsable de un hecho ajeno conforme a los artículos 2320 y 2322 del Código Civil.

3º) Que, en ese orden de ideas, al condenar la sentencia de 2 de diciembre de 2014 a BBVA al pago de intereses “*desde la mora*”, es decir, desde que se puso a éste en conocimiento de que ha causado un daño y que el perjudicado espera su restauración, tales condiciones se reunieron al accionar civilmente CORFO conforme al artículo 103 bis del Código de Enjuiciamiento Penal, oportunidad en que individualizó todos los instrumentos financieros por cuya desviación solicitó la indemnización de perjuicios, expresando también el monto total al efecto.

4º) Que por lo antes expuesto, la sentencia impugnada no ha incurrido en una errónea aplicación del derecho, debiendo desestimarse el recurso de casación en el fondo.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Munita y de la disidencia su autor.

Regístrese.

Rol N° 8738-18.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y el Abogado Integrante Sr. Diego Munita L. No firma el Ministro Sr. Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.



HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 28/05/2021 13:50:16

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 28/05/2021 13:50:17

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 28/05/2021 13:50:18

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 28/05/2021 10:31:25



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

MARCELO DOERING CARRASCO
MINISTRO DE FE
Fecha: 28/05/2021 15:00:01

En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

MARCELO DOERING CARRASCO
MINISTRO DE FE
Fecha: 28/05/2021 15:00:01



SENTENCIA DE REEMPLAZO:

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce íntegramente la decisión en alzada así como lo consignado en el considerando 14° de la sentencia casada y los motivos 9° a 19° del fallo de casación que antecede.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia de diez de noviembre de dos mil quince, escrita a fs. 329 y siguientes, **con declaración** que debe procederse a la tasación de las costas personales.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Llanos, quien, por los fundamentos entregados por la sentencia casada y en su disidencia al fallo de casación que precede, estuvo por revocar el pronunciamiento en alzada y, en su lugar, ordenar que se practique la liquidación de los intereses corrientes, desde la constitución en mora de la demandada, considerando como tal el ejercicio de la acción civil en el sumario por la actora, con fecha 4 de septiembre de 2003.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Munita y de la prevención su autor.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Rol N° 8738-18

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y el Abogado Integrante Sr. Diego Munita L. No firma el Ministro Sr. Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.



HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 28/05/2021 13:50:19

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 28/05/2021 13:50:19

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 28/05/2021 13:50:20

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 28/05/2021 10:31:26



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

MARCELO DOERING CARRASCO
MINISTRO DE FE
Fecha: 28/05/2021 15:00:02

En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

MARCELO DOERING CARRASCO
MINISTRO DE FE
Fecha: 28/05/2021 15:00:02

